SOCIEDAD

Empleo solidario ... y rentable

Los centros especiales de empleo son una respuesta a la inserción laboral de las personas con discapacidad en edad de trabajar, un colectivo de más de un millón de personas. Desde que se aprobó en España una legislación específica, en 1982, una serie de entidades, como cooperativas y asociaciones, han conseguido crear empresas que son rentables y solidarias a la vez. Con todo, la crisis y los recortes también hacen mella en este sector, que se las ingenia para seguir adelante.

Texto de **Eva Millet**

LLIBERT TEIXIDÓ

Los telares de la cooperativa Teixidors, en Terrassa, aprovechan la tradición textil de esa ciudad catalana para dar trabajo a 44 personas, 32 de ellas con discapacidad

Para llegar al lugar donde se fabrica un yogur de gran calidad hay que atravesar un hayedo fabuloso, preludio perfecto a una utopía realizada. En la Garrotxa (Girona), en plena Fageda d'en Jordà, se ubican las instalaciones de una cooperativa que emplea a la mayoría de los discapacitados psíquicos y personas con trastornos mentales severos de la comarca. Un dato que es el aval de un proyecto social muy importante, pero que muchos de los consumidores de los productos de la marca La Fageda ignoran o ignoraban la primera vez que probaron uno de los deliciosos yogures que produce.

Este desconocimiento no molesta a Cristóbal Colón, el fundador de La Fageda. Al contrario: siempre ha huido de que la discapacidad de los trabajadores sirviera como elemento de sensibilización del consumidor. Dice que la clave es que el producto se compre porque es bueno "y punto". Vende calidad, no caridad –aunque esta práctica, en estos últimos años, ha vuelto con inquietante naturalidad en la sociedad española–. Esta política supone además un baño de autoestima para los empleados, porque la gente consume lo que hacen porque les gusta, no por pena.

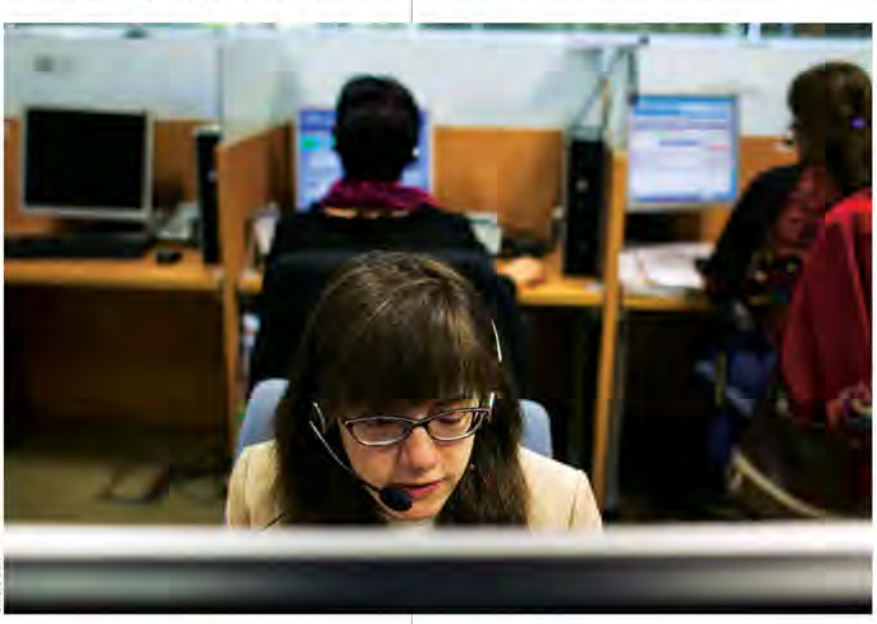
La Fageda, un modelo de negocio que se estudia en la Universidad de Harvard, fue fundada en 1982 por Cristóbal Colón, un exsastre de Zaragoza, quien estudió Psicología y, tras trabajar en los psiquiátricos españoles de los años setenta, se dio cuenta de que aquel modelo que condenaba a los enfermos mentales a un encierro de por vida no funcionaba. Colón defendía que el mundo del trabajo es una de las vías más rehabilitadoras, socializadoras y normalizadoras que existen, así que se puso manos a la obra para buscar soluciones fuera de los parámetros imperantes. No le arredró la estadística que dice que las personas con mayores problemas de empleabilidad son las que tienen discapacidad psíquica o trastorno mental grave.

Alto, delgado y de carácter determinado, Colón cuenta que su premisa, hace más de 30 años, fue montar "un proyecto empresarial real, pero cuya única vocación fuese ayudar a esta gente de una forma perdurable". "Tenía también clarísimo que no iban a ser la mano de obra barata de un tercero", recalca desde su oficina en Mas Els Casals, la sede social de La Fageda, con vistas al parque natural de la zona volcánica de la Garrotxa.

Con estos requisitos creó, en 1982, la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro La Fageda, que hoy tiene en nómina a 120 personas con discapacidad. Cada año, produce 55 millones de yogures, flanes, cremas catalanas, helados y, recientemente, mermeladas. En las 15 plácidas hectáreas que comprende Mas Els Casals se lleva a cabo la mayoría de las actividades, tanto asistenciales como productivas, de este proyecto social ya de largo recorrido.

Teixidors, en Terrassa, es otra cooperativa, nacida con unos principios similares. Fundada en 1983, es el resultado del compromiso del matrimonio formado por Marta Ribas, una asistente social especializada en salud mental, y Juan Ruiz, un ingeniero técnico. Como Colón, ambos tenían clarísimo que el trabajo es un factor de normalización decisivo para personas con discapacidad. Sin embargo, para que diera resultados, tenía que ser un trabajo digno y creativo, del que salieran productos de calidad. "Y la *laborterapia* que se implementaba cuando empezamos era para tener ocupación, pero con poca calidad del trabajo...", recuerda Ruiz.

El textil, que tanta historia tiene en Terrassa, fue la llave para canalizar estas inquietudes. Marta Ribas y Juan Ruiz montaron, desde cero, una empresa textil artesanal. Aprendieron el oficio de tejer, restauraron telares manuales y empezaron a formar para el trabajo a personas con discapacidad mental. Poco a poco, se fue creando un sólido equipo de trabajo y



DANI DUCH

Personas discapacitadas trabajan en teleasistencia y otras labores en la empresa Personalia en Madrid, integrada en el Grupo Fundosa. Este conglomerado, impulsado por la Fundación ONCE, emplea a 17.000 personas

Cooperativas como La Fageda o Teixidors se fundamentan en la idea de que el trabajo debe ser digno y creativo y manufacturar productos de calidad, sean yogures, mantas u otros

empezaron a fabricar mantas y plaids, fulares, colchas... con lanas ecológicas y otras fibras de primerísima calidad, que hoy se venden en algunas de las mejores tiendas del mundo. Los productos Teixidors dan trabajo a 44 personas –32 de ellas, con, como se prefiere llamarlo en esta empresa, "capacidades diferentes"– que manipulan con suma habilidad los telares de madera en el taller ubicado en una antigua fábrica textil.

Cuando se fundó Teixidors acababa de aprobarse, en 1982, la ley de Integración Social del Minusválido (conocida popularmente como Lismi), una normativa que sirvió para dar visibilidad a los trabajadores discapacitados, con premisas tan básicas como que cotizaran en la Seguridad Social. Estipulaba que para que una empresa se calificara como "centro especial de trabajo" tendría que tener, como mínimo, un 70% de empleados con discapacidad; también incluía la obligación de que las empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores contrataran a un número de empleados con discapacidad no inferior al 2%, recibiendo, a cambio, una bonificación del 90% de la cotización en la Seguridad Social.

Hasta la aparición de la Lismi (que ha sido muy poco modificada desde su promulgación), existía un vacío flagrante. "Había personas preparadas para trabajar, pero no se disponía de la regulación ni de los apoyos para poder integrarlos en este mundo", recalcan desde Amadip.esment. Con base en Mallorca, esta fundación fue en sus inicios el fruto (como ha ocurrido en otros avances importantes en este ámbito) de la inquietud de unos padres de niños con discapacidad intelectual que veían que si ellos no actuaban, sus hijos no tendrían oportunidades en la sociedad.

"La asociación se constituyó en 1962", relatan el gerente, Fernando Rey Maquieira, y el responsable de innovación, José Manuel Portalo. "La primera etapa coincide con la falta de democracia, y hay una lucha muy fuerte por los derechos y la dignidad y por conseguir algunos servicios para estas personas", añaden. A partir de los años ochenta, la organización se profesionaliza, y hoy emplea a 180 personas con discapacidad intelectual. Entre otras, Amadip.esment comprende una empresa de jardinería y de agricultura ecológica, da servicios de limpieza y mantenimiento y cuenta con locales de restauración, como dos cafés en Palma, atendidos por personas con discapacidad.

Esta visibilidad, que ha suplido las dinámicas de ignorancia y ocultación que imperaban hacía unos años, es uno de los avances sociales que han facilitado este tipo de empresas. "Para mí, el éxito principal de nuestra labor es que se vea con naturalidad que una persona con discapacidad puede estar trabajando como reponedora en una gran superficie o atenderte en la recepción de un hotel. Eso hubiera sido impensable hace 30 años", señala Txema Franco, director general de Lantegi Batuak, la iniciativa empresarial de mayor dimensión en el ámbito del empleo protegido de Bizkaia. Esta entidad sin ánimo de lucro nació también en 1983, con el objetivo de centralizar la gestión y coordinar la red de los talleres ocupacionales para personas con discapacidad que existían en la provincia.

"A principios de los sesenta hubo un importante movimiento asociativo en España con el que la iniciativa ciudadana intentaba suplir el vacío de políticas públicas hacia este colectivo", recuerda Franco. Como sucedió en Mallorca, los familiares de personas con discapacidad empezaron a asociarse para luchar por la normalización, promoviendo su integración social. Treinta años después, aquellos talleres se han transformado en un sólido grupo industrial y de servicios, con una →

LLIBERT TEIXIDÓ

Los cooperativistas de La Fageda producen 55 millones al año de yogures, flanes, helados... en un modelo de negocio que se considera rentable e integrador para sus 120 empleados

→ plantilla de más de 2.600 personas, de las cuales 2.300 tienen una discapacidad. Lantegui trabaja en sectores tan diversos como electrónica, energías renovables, automoción, jardinería, limpieza, marketing directo y turismo.

Con unas ventas de 50 millones de euros en el 2012, Lantegui es un ejemplo, como señala Franco, de cómo algunos centros especiales de empleo "se han convertido en empresas consolidadas, que compiten en el mercado como cualquier empresa ordinaria". De hecho, en el sector hay incluso grandes conglomerados, distintos a modelos como los de La Fageda y Teixidors, pero que también suponen una plataforma importante para este tipo de trabajadores. Uno de los más conocidos es el Grupo Fundosa, que cuenta con 17.000 empleados y fue creado en 1989 por la Fundación ONCE. "Quisimos convertirnos en un proveedor de referencia que trata de dar la vuelta a la discapacidad, convirtiéndola en capacidad", explica Fernando Riaño, su director corporativo de alianzas, sinergias y responsabilidad social corporativa.

Con una cartera de productos y servicios que van desde la tecnología hasta las lavanderías industriales y la teleasistencia, Fundosa nunca ha olvidado, recalca Riaño, que su base es buscar el equilibrio entre lo económico y social: "Además de servir como ejemplo a las empresas del mercado ordinario de que las personas con discapacidad podemos ser y somos rentables".

DANI DUCH

Hacer un trabajo productivo y de calidad, como en una empresa corriente, es gratificante para los trabajadores. En esta imagen, en la lavandería industrial Flisa

DANI DUCH

"Desventajas no podría decir ninguna: no creo que tengamos nada que envidiar a una lavandería con un personal sin discapacidad", asegura la responsable de una lavandería industrial del Grupo Fundosa

Y es que pese a los avances en esta materia, aún existen reticencias del mundo empresarial convencional en apostar por este tipo de trabajadores. Una actitud que ya existía antes de la crisis. La web oficial de la Lismi constata el "insuficiente grado de cumplimiento" de la obligación que las empresas con más de 50 trabajadores contraten a un número de empleados con discapacidad no inferior al 2%. Esto hizo que en el año 2000 se aplicaran medidas alternativas para estas empresas reticentes, como la de compra de bienes a un centro especial de empleo, la donación o el patrocinio.

Ester Bordes, responsable de la planta de Sant Boi de Llobregat de Flisa, una de las lavanderías industriales del Grupo Fundosa, no entiende que haya reservas para emplear a trabajadores diferentes. "Aquí en Sant Boi se llega al 91% de plantilla con alguna discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial –explica–. Pero su capacidad de trabajo, su esfuerzo y su carácter es tal que desventajas no podría decir ninguna: no creo que tengamos nada que envidiar a una lavandería con un personal sin discapacidad".

Un recorrido por las modernas instalaciones, donde todo funciona como un reloj y cada uno sabe perfectamente lo que hace, ratifica esta declaración. "Estamos a →

En estas fotos, empleados de la asociación Amadip. esment, que cuenta con explotaciones agrícolas y de jardinería en el municipio mallorquín de Son Ferriol

JAUME REINA

JAUME REINA

Los trabajadores de los centros especiales viven conflictos de relaciones, ansiedad... como cualquier empleado, sólo que de forma más acentuada

→ la vez demostrando que el personal discapacitado es productivo y hace un servicio de calidad igual que una empresa ordinaria, lo que, unido a la gratificación personal y profesional, es algo muy positivo", añade Montse Canals, responsable del área social de Fundosa. Educadora social y con una discapacidad física que no le ha impedido llegar hasta este puesto clave, Canals lleva cinco años ejerciendo un trabajo que, entre otras cosas, implica la coordinación del equipo de educadores y psicólogos del grupo.

La presencia de un equipo de profesionales de este tipo para atender las necesidades de los trabajadores es obligatoria para los centros especiales de empleo regulados por la Lismi. "Nuestra función es dar el apoyo necesario para que las personas puedan acceder al trabajo, aprenderlo y, en especial, mantenerlo, que es la parte más difícil", explica María Colón Jordà, una de las psicólogas del equipo asistencial de La Fageda. La relación con la Administración y con las familias, el seguimiento y la formación de los trabajadores, además de un programa individual para que cada uno pueda desarrollar al máximo su autonomía personal y laboral, son algunas de las áreas que cubre este servicio fundamental.

María Colón lleva seis años en La Fageda y considera que los trabajadores con "capacidades diferentes" viven su experiencia laboral "de la misma manera que cualquiera en un trabajo corriente, pero de forma más acentuada: conflictos en las relaciones, niveles diversos de ansiedad e inseguridad, aprendizajes más lentos... Todo hay que aumentarlo un poquito", ilustra. En La Fageda, una premisa básica es adaptarse a las necesidades de los empleados y no a la inversa, una fórmula que, según la psicóloga, sólo puede repercutir favorablemente. "En el fondo –apunta–, "tendría que ser lo natural en cualquier lugar porque, como resultado de este cuidado, aquí todo el mundo tiene ganas de hacer las cosas bien, y cuando esto pasa, el trabajo es muy sencillo".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2011 había 1.262.000 personas con certificado de discapacidad en edad de trabajar (entre 16 y 64 años), lo que supone el 4,1% de la población española en edad laboral. Sólo algo más del 36% de personas con discapacidad legalmente reconocida eran activos: una tasa casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. Pese a la labor pionera de entidades como las que aparecen en este reportaje y los muchos reconocimientos que han recibido (entre todas suman un montón de galardones, como la Medalla al Mérito en el Trabajo y varios premios Integra BBVA), aún queda mucho por hacer en materia de empleo de este colectivo, vulnerable por naturaleza.

Además, la crisis económica y los recortes están afectando también a los →

DANI DUCH

Los centros especiales ofrecen hoy en día una gran diversidad de trabajo, desde manuales hasta industriales, desde explotaciones agrarias hasta administrativos y otros servicios

DANI DUCH

→ centros especiales de trabajo. Y, aunque en ninguno de los visitados se ha hecho hasta la fecha expedientes reguladores de empleo, en muchos se ha tenido que adoptar estrategias contra la difícil coyuntura. Desde ajustar precios hasta apostar por la innovación y la economía *verde*, pasando por la diversificación de las vías de la financiación y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior.

Por otro lado, la Administración ha recortado las ayudas: sobre todo, las que conciernen a la creación de nuevos empleos. La gestión de los trabajadores con dificultades especiales está transferida a las comunidades autónomas y, aunque en todas se prevén las ayudas básicas reguladas por la Lismi, varían en función de dónde se desarrollan. "Esta situación de desigualdad territorial se ha acrecentado por la crisis y los problemas presupuestarios –explica Txema Franco–. Ello hace que haya algunas autonomías que mantienen su posición, como Euskadi, Navarra, Galicia y Aragón, mientras que otras están retrocediendo, como Catalunya, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía".

En Catalunya, por ejemplo, como denuncia Juan Ruiz, desde el 2011 no hay partida presupuestaria para nuevos puestos de trabajo en centros especiales: la Administración ha congelado las plazas. "Hasta entonces, el alta era automática, con unos incentivos básicos: la subvención del 50% del salario mínimo y el 100% de la bonificación de la Seguridad Social. Como ahora ya no hay plazas, si necesitamos emplear a alguien nuevo, tenemos que hacer de quijotes y contratarlos como a un trabajador corriente, sin el apoyo administrativo, fundamental para seguir adelante".

En La Fageda cuentan que esta congelación de plazas hace que, por primera vez en su historia, tengan una pequeña lista de espera de posibles trabajadores, que se está intentando absorber. En Baleares, tampoco salen nuevas plazas. "Hoy atendemos entre 20 y 50 personas sin financiar. Hace menos de un año eran 14. Hace dos años, ninguna... Este es el ritmo de los cambios", señalan los responsables de Amadip. esment. "La demanda sigue existiendo, por lo que urge encontrar fórmulas entre empleo y servicio social que faciliten que muchas personas no queden fuera".

Un estudio hecho en Bizkaia demuestra que cada euro público invertido en centros especiales de trabajo proporciona un retorno de 6,35 euros, pero la Administración está recortando ayudas en toda España

Juan Ruiz pide la descongelación de las ayudas y también un mayor control por parte de las administraciones: "Porque se ha cometido un error al considerar a todos los discapacitados por igual, lo que ha provocado una irrupción de centros especiales para emplear a personas con discapacidades leves, las cuales necesitan menos apoyos... Esto quiere decir que una parte de los fondos no se está utilizando bien, lo que debe remediarse. Existen los datos para hacerlo", apunta Ruiz.

Es necesaria una mejor gestión, pero los expertos son unánimes en que la Administración no debería cerrar el grifo a este colectivo. Porque se trata, recuerdan, de buena inversión. Sirva como ejemplo el estudio elaborado en el 2013 por Lantegi Batuak con la Universidad del País Vasco, que demuestra que por cada euro público invertido en Bizkaia en centros especiales de trabajo ha habido un retorno de 6,35 euros. "El valor económico que hemos generado en el territorio ha sido de 444 millones de euros en los últimos cinco años", detalla Txema Franco. Unas cifras que demuestran que una política activa de empleo para personas con discapacidad es altamente rentable para la sociedad. Y no sólo en lo que respecta a algo tan fundamental como es la cohesión social sino, también, por su impacto económico.○